

Servicio Integrado de Información Arroceras (05 marzo 12)

La Nación

MEDIDA SE DARÍA EN PRÓXIMOS MESES

Comisión alista terreno para liberalizar precio del arroz

Acuerdan bajar cultivo local de 81.000 hectáreas a 60.000 hectáreas

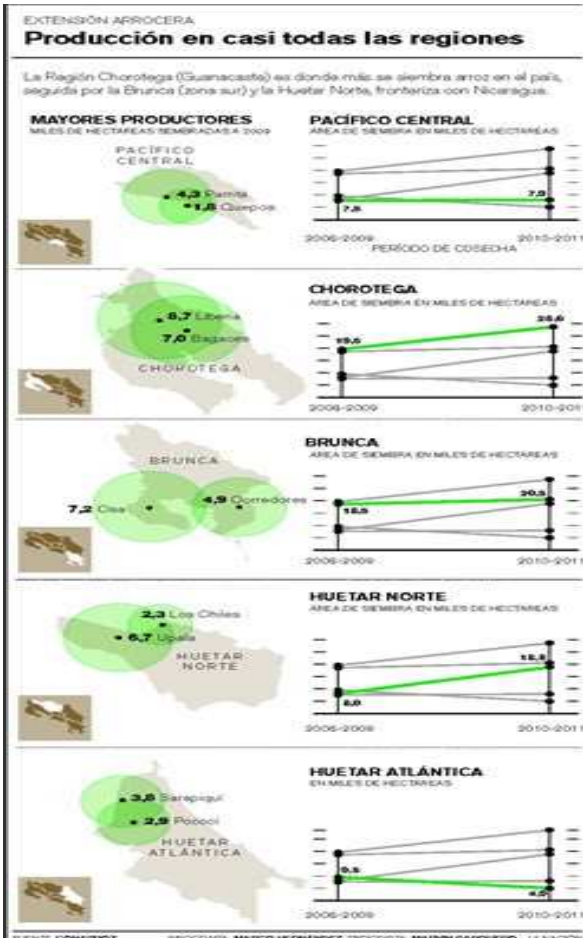
Tres plantas del CNP se alquilarán a productores antes del 30 de abril

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 12:00 A.M. 05/03/2012

Acuerdos tomados entre Gobierno, productores e industriales en una comisión de alto nivel allanan la vía para terminar la fijación por ley del precio del arroz.

IMAGENES/FOTOS





Una cosechadora en plena labor en Palmar, cantón de Osa. Ese cantón es el principal productor arrocero de la zona sur del país.

+ MULTIMEDIA

La liberalización del precio sería en los próximos meses, mediante un decreto del Gobierno. Primero se liberará el valor que paga el industrial al productor y, luego de algunos meses –para consumir la reserva comprada a precios viejos–, se dejará libre el precio al consumidor.

El arroz es el principal producto de consumo. En el período 2010-2011 se necesitaron 227.495 toneladas de grano pilado (sin cáscara) al año, de las cuales 189.767 se cosecharon aquí. El resto se importó de varios orígenes.

Los tres sectores pactaron reducir la siembra de las 81.000 hectáreas del período 2011-2012 a 60.000 hectáreas en el 2012-2013.

Todo productor sembrará solo bajo un contrato de compra con una de las industrias, que tendrá validez legal.

Esto evitará que la cosecha sobrepase la capacidad industrial y cause problemas de recibo.

El área asignada a cada productor se determinará por su participación histórica, según registros de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). A quienes tengan cinco o más años de sembrar se les aplica el 100% de promedio; a los que posean cuatro años, un 60%; a quienes tengan dos años, un 40%, y a los de solo un año, un 20%.

El Gobierno se comprometió a entregar a cooperativas de arroceros, mediante alquiler a 25 años, tres plantas del Consejo Nacional de Producción (CNP), antes del 30 de abril. Se trata de las instalaciones ubicadas en Liberia, en La Rita de Pococí, Limón, y en Térraba, cantón de Osa, zona sur.

El proceso más avanzado es entre Coopebagatzí y la planta de Liberia. Se cobrarán ¢30 millones mensuales a la cooperativa.

Solución. El arroz es el único producto que actualmente se mantiene con precio fijado por ley para las calidades 80-20 (20% de grano quebrado) o inferiores. La ministra de Economía, Industria y comercio (MEIC), Mayi Antillón, repitió esta semana que, para el Gobierno, esa medida es una distorsión que estimula el cultivo sin control y castiga al consumidor con precios altos.

En la cosecha 2006-2007, el área cultivada con ese grano era de 47.252 hectáreas y pasó a 81.022 hectáreas en el período 2010-2011.

El número de productores subió de 970 en el 2008-2009 a 1.490 en el año arrocero 2010-2011.

Además del precio, el Plan Nacional de Alimentos estimuló la actividad. Productores de rubros deprimidos, como el del melón, se pasaron a sembrar arroz.

El aumento en la producción, que pasó de 238.679 toneladas en granza en el 2008-2009 a 290.474 toneladas en el 2010-2011, causó varios problemas al Gobierno. Debíó intervenir en las últimas tres cosechas para mediar y que la industria recibiera el grano nacional, mientras los productores protestaron con bloqueos de vías cerca de la Casa Presidencial, en Zapote, y en diferentes carreteras nacionales, como la Interamericana norte y sur.

Adicionalmente, la fijación de precio significa otra piedra en el zapato para el Gobierno a escala internacional, pues en la Organización Mundial del

Comercio (OMC) se le acusa de incumplir un denominado subsidio al productor mediante ese sistema. Ese problema también quedaría superado si se cumplen los acuerdos.

El vocero de la comisión de alto nivel, Agustín Navarro, reconoció los acuerdos, y dijo que, incluso, ya fueron aprobados en asambleas de las cinco regiones arroceras.

Cuatro arroceras tienen un 75% del mercado

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 12:00 A.M. 05/03/2012

Cuatro industrias arroceras manejan el 75% del mercado local del grano, de acuerdo con las cifras oficiales de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Se trata de las empresas Compañía Arrocera Industrial (El Pelón de la Bajura), Corporación Arrocera Costa Rica, El Porvenir y Coopeliberia.

Los datos corresponden al año arrocero 2010-2011, en el cual Costa Rica demandó 227.495 toneladas métricas de arroz pilado (sin cáscara), para un consumo promedio mensual de 18.957 toneladas mensuales en grano pilado.

Esto convierte ese cereal en el de mayor consumo en el país.

Las cifras indican que el mercado arrocero está concentrado, reconoció Ana Victoria Velásquez, directora de la Dirección de Apoyo a la Competencia, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Esa situación, empero, no viola ningún reglamento ni puede motivar ninguna investigación.

En mercados concentrados, la vigilancia se debe dar si las pocas industrias dominantes se ponen de acuerdo en alguna práctica comercial, lo cual sí motivaría una investigación de la Comisión para Promover la Competencia (CPC), relató Velásquez.

La CPC sí se ha pronunciado, desde hace muchos años, en el sentido de eliminar la fijación de precios del arroz, tanto al productor (en granza) como al consumidor, recordó Velásquez. Un acta de la CPC, del 24 de agosto del

2000, contiene este acuerdo: “Comunicar al señor ministro de Economía, Industria y Comercio nuestro reiterado criterio en el sentido de no regular el precio del arroz en ningún nivel de la cadena de producción o comercialización”.

La medida de liberar el precio, que ahora se tomaría dentro de pocos meses, podría perjudicar a pequeños productores, que son la mayoría. Según datos de Conarroz, 1.187 productores cultivaron menos de 50 hectáreas; 223, menos de 200, y apenas 72, encima de las 200 hectáreas, para el año 2010-2011.

Ese peligro, que se daría si las grandes arroceras no quieren comprar al productor e importan por precios más bajos, se disminuiría con la entrega de plantas a cooperativas, según el Gobierno.

Carlos Arguello, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), dijo que no se oponen a la “verticalización” (participar en el cultivo, la industria y hasta la comercialización) de los pequeños productores. Pero advirtió que el Gobierno les dará plantas con maquinaria obsoleta y en muy mal estado.

Añadió que la industria pide un mecanismo flexible para la proporción entre importaciones y cosecha local, para que no haya obligación de adquirir materia prima local a precios muy altos.

EN POCAS PALABRAS

‘Modelo es cautivo’

Marvin Barquero [S.mbarquero@nacion.com](mailto:mbarquero@nacion.com) 12:00 A.M.05/03/2012

Carlos González

Presidente delos industriales

¿Están de acuerdo con liberar los precios?

El modelo actual de fijación de precios es un modelo cautivo. Toma en cuenta una serie de parámetros, los cuales hacen que el país no camine hacia la productividad; es un esquema proteccionista. Mientras eso suceda, va a causar que agricultores improductivos y no competitivos quieran seguir en la actividad. Por ejemplo, se basa en una productividad ponderada nacional, donde va desde los pequeños a los grandes. Eso crea un precio muy favorable para los eficientes y ruinoso para los que no son eficientes.

¿Eso implica apoyar el precio libre para el grano?

Eso nos lleva a que el sector tiene que aprender a navegar en un mercado libre de compra y venta, respetando, eso sí, la ley de protección a la libre competencia, la ley de monopolios y otros. Así es como se trabaja en casi todos los productos. El arroz es el único producto regulado actualmente.

¿Apoyan el acuerdo para cosechar aquí el 60% e importar el resto del consumo?

La proporción debe ir en relación con la competitividad. Puede variar en función de cómo se mueva el mercado internacional y la productividad interna para tener un precio final competitivo. Que esto no vaya a provocar que, por respetar la proporcionalidad, se obligue a comprar materia prima interna cara. El Gobierno también debe ser capaz de ofrecer opciones a los pequeños productores para ser competitivos.

Diario Extra

- **Entidad arrastra problemas por ¢41 mil millones entre impuestos y déficit**

EMPLEADOS DEL CNP EMPLAZAN A JUNTA DIRECTIVA

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com

Los empleados del Consejo Nacional de Producción (CNP) emplazaron a la junta directiva para que en cuestión de un mes presente un plan de acción concreto para resolver el problema financiero de la institución.

Esto se desprende de una carta enviada el pasado viernes a los directivos, donde se dice que el déficit del CNP es el más alto de la historia y asciende a ¢25 mil millones, adicionalmente habría deudas con el fisco por ¢16 mil millones.

“Hemos visto cómo la crisis del Consejo se acrecienta y los generadores de recursos sanos como el Programa de Alimentación Institucional (PAI) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) están totalmente descapitalizados, sumado a lo anterior, deudas con proveedores del PAI, con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Hacienda y el Fondo de Garantía y Jubilaciones de los Empleados del CNP, un déficit acumulado de más de ¢6 mil millones”, indica la misiva.

Según los empleados del CNP, no van a ser tan ingenuos de creer que los problemas financieros de la institución son circunstanciales y no obedecen a una política clara de cierre.

“Basta con ver las actas de la junta directiva y las inexistentes iniciativas para resolver el problema, que contrastan con las declaraciones de la ministra de Agricultura, Gloria Abraham, así como las del vicepresidente de la República, Luis Liberman, quienes manifiestan están fortaleciendo el CNP y la Fanal, aun cuando sus acciones y directrices distan mucho de esa afirmación”, dijo Manuel Porras, secretario general del Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción y Afines (Sinconapro).



Según Manuel Porras, secretario general de Sinconapro, el manejo financiero parece estar orquestado como una política clara de cierre.

NO A TRUEQUES CON ARROCEROS

Porras resaltó que no están de acuerdo con los trueques del CNP con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), que pretende entregar plantas como regalía, lo que a su criterio debilita la acción del Estado en materia de seguridad alimentaria y desprotege a otros sectores productivos como productores de maíz y frijol.

Adicionalmente el Sinconapro solicita atender lo señalado por la Defensoría de los Habitantes y desestimar la reestructuración por falta de estudios técnicos y financieros.

“Que dejen de mentirles a los empleados del CNP, a Costa Rica y cumplan con el compromiso para el cual fueron elegidos”, se lee en la carta enviada por Porras.

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

Otra de las demandas de Sinconapro es que se sustituya de manera inmediata a aquellos funcionarios de la administración superior, ya sea gerentes, subgerentes o directores, que no hayan demostrado capacidad para ejercer sus cargos.

La semana anterior se anunció la salida del CNP de la subgerente de Desarrollo Agropecuario, Carolina Delgado, pues asumirá la curul del Partido Liberación Nacional que dejará el diputado Francisco Chacón.

El cese de funciones se produce después de que la Junta Nacional de Ferias solicitara su remoción.

El Financiero

ECONOMÍA Y POLÍTICA



Abandono. La planta de Barranca fue un complejo industrial, pero ha recibido poco mantenimiento.
jorge castillo Para EF

CNP agoniza y su reforma aún gatea

Elementos de la reestructuración como la fusión de departamentos caminan más lento

Edición 859

Eugenia Soto Morales

La agonía del Consejo Nacional de Producción (CNP) se extiende. El proceso de reestructuración que debe devolverle la vida a las finanzas de la entidad, que en 2011 proyectaba cerrar el año con un déficit cercano a los ₡1.000 millones, avanza con lentitud.

Los productores agrícolas que deben tratar con la institución aseguran que la situación está estática, sin mejoras.

Las turbulencias económicas del Consejo son de larga data. Hace más de una década, las arcas de la entidad, alimentadas en gran parte por las ventas de la Fábrica Nacional de Licores, se comenzaron a secar.

El traslado de los fondos del Programa de Reconversión Productiva al Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade) al Sistema de Banca para el Desarrollo también impactó en las finanzas del CNP, que se quedó sin el dinero, pero retuvo las funciones generadas por el programa.

Danza de plazas

La situación se agravó con la caída en las ventas de la Fanal durante los últimos años. El Consejo comenzó a sumar problemas y deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social, con las municipalidades, proveedores y con la Administración Tributaria.

Con el barco haciendo aguas, una de las soluciones planteadas fue aplicar recortes a las 750 plazas que conforman la planilla.

El plan dado a conocer en mayo del año pasado habría cifrado en 220 el número de puestos laborales a eliminar mediante la jubilación anticipada, ofreciendo traslados a instituciones o beneficios para reiterarse.

Estudios que relevaron el excesivo peso del personal dedicado a labores administrativas en la planilla hacía este un camino propicio para lograr ahorros. Además, el promedio de empleados de la entidad se encuentra es de 46 años daba mayor sentido a un programa que incentivara la jubilación anticipada de funcionarios.

Sin embargo, en diez meses los planes parecen haber cambiado y las negociaciones con una dirigencia sindical más beligerante resultaron en una meta más modesta en el número de plazas a congelar.

“De los 157 a reestructurar, en el 2011 se pensionaron 59, para el 2012 existen 25 prejubilados, 17 con movilidad voluntaria, nueve que presentaron interés en la movilidad conforme lo establece la Ley 6955. Por lo tanto, existen 47 pendientes”, enumeró Román Solera, presidente ejecutivo del Consejo.

Estructuras duplicadas

Para acoplarse a una menor cantidad de personal y cumplir la meta de ajustarse el cinturón, el plan de reestructuración contemplaba la fusión de varios departamentos duplicados en el Consejo y Fanal.

La unificación de las operaciones de recursos humanos, planificación y administración avanza con mayor lentitud. El plan será presentado durante el presente mes ante la Junta Directiva de la institución, incluyendo la información sobre el nuevo ordenamiento y un manual de clases institucionales.

47

plazas quedan pendientes de eliminar en la planilla del Consejo Nacional de Producción.

600.000

metros cuadrados de terreno suman las cinco plantas de proceso y almacenaje del CNP. Este debe ser aprobado también por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Los años invertidos en transformaciones fallidas o incompletas no parecen haberle dado carácter de urgencia al actual proceso. En el CNP ven con agrado el avance.

“Conforme los lineamientos del Ministerio de Planificación una vez aprobado por ese ministerio la modernización integral, la Institución cuenta con un año para su implementación, y una vez aprobada la modernización parcial se

cuenta con seis meses para su implementación. Esta última fue aprobada por Mideplan el 13 de diciembre de 2011”, aseguró Solera.

Hasta el momento, los responsables de la reestructuración han concentrado sus esfuerzos en comunicar la aprobación de los planes; identificar el personal interesado en acogerse a procesos de movilización, informar a los funcionarios sobre las entidades dispuestas a aceptar traslados, y en recibir las solicitudes de los interesados en el plan de movilidad laboral o jubilación adelantadas.

Sin impacto

Fuera de las paredes del Consejo, el proceso ha pasado inadvertido.

“El problema del CNP es que padece de obsolescencia institucional. Se creó en circunstancias económicas y de mercado diferentes a la de hoy, no se actualizó su estructura. Lo que hoy tenemos es una institución que es dueña de propiedades, y a todos les interesa por eso”, aseguró Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

Con los mismos pecados en su funcionamiento, el Consejo ha desaprovechado la oportunidad de volver a ser el aliado del sector agrícola mediante funciones que satisficen de mejor manera las necesidades actuales de un sector dinámico.

La realización de subastas electrónicas que permitan al productor vender sus cosechas de forma transparente es una de las oportunidades desaprovechadas.

El aprovechamiento de las instalaciones que por la ausencia de recursos se han deteriorado con el paso del tiempo es otra de las inquietudes de los productores que deben lidiar con el Consejo.

Riqueza desperdiciada

El Consejo es propietario de cinco plantas ubicadas en diferentes puntos del país desde Liberia hasta Palmar Norte. En total los terrenos juntos superan los 600.000 metros cuadrados.

El plantel de Liberia, que tiene un área de más de 300.000 metros cuadrados, cuenta con ocho silos para almacenamiento de grano, seis silos secadores, dos secadoras y equipo de prelimpieza de granos. Pero solo los silos para granos están en funcionamiento.

La Rita, ubicada en Pococí y diseñada para el almacenamiento, limpieza y secado del maíz llegó a ser considerada la más moderna de Centroamérica. Hoy está solo en capacidad de brindar servicios de almacenamiento.

“Tienen activos que podrían apoyar la producción de granos, pero están en un estado de desatención que hacen su funcionamiento deplorable”, dijo Carlos González, presidente de la Cámara de Industriales del Arroz.

Estas ocho plantas son testimonio de que el tiempo es implacable, y que no ha dejado de pasarle la factura a una institución con más de una década intentando cambiar... y que aun se encuentra lejos de la meta.